



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO DE MENORES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO” (50 PLAZAS)”.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

• MARCO NORMATIVO.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa, que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento de su objeto:

- **La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor**, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que, en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido en el caso de la Comunidad de Madrid dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Familia, Juventud y Política Social) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Esta Ley Orgánica, así como la **Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid**, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos **la supremacía del interés del menor**. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales. Por su parte, el artículo 66 contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.

- **La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- **La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Por su parte, el artículo primero, apartado nueve, se refiere a los supuestos de “Atención Inmediata” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

- La **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia**, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la



sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

- **La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid**, modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.
- **La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid**, que determina los sectores de infancia y juventud marginada como tributarios de atención por los Servicios Sociales, a fin de prestarles la adecuada protección previniendo su marginación, fomentando su participación social y favoreciendo su incorporación a la sociedad mediante actuaciones normalizadoras e integradoras. Ello de conformidad con los principios que el art. 3 de dicho texto legal señala como inspiradores de los Servicios Sociales y de entre los que cabe destacar el de responsabilidad pública y el de colaboración de la iniciativa privada.
- **El Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo**, exige a las Residencias el desarrollo de las funciones de educación, y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6), y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en que ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.

A su vez, el Estatuto determina, en su artículo 3, la tipología de recursos residenciales en función de la población a la que atienden y las características de su proyecto. Entre ellos, se encuentran los centros residenciales, en los que se encuadrarían los recursos residenciales objeto de este Contrato.

• NECESIDAD DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.

Durante la última década, desde los estamentos de protección de menores de nuestra Comunidad Autónoma, se observa de forma alarmante un elevado número de incidentes provocados por agresividad de preadolescentes y adolescentes (agresividad intrafamiliar, de género, agresividad hacia iguales...). Agresividad que ha producido un incremento en un 33% de las denuncias por violencia, en las que en un 10,5% de los casos los agresores son menores de 16 años. Dichos problemas comportamentales graves afectan a la esfera familiar, social y/o escolar, cada vez es mayor el número de casos urgentes y graves para los que se solicita plaza en centro de protección de menores específico destinado a menores con trastorno del comportamiento. Paralelamente desde los recursos de protección de menores se ha constatado un cambio en el perfil de los niños y jóvenes atendidos, pero el cambio más importante ha sido el evidente agravamiento de los problemas de conducta que la población atendida en acogimiento residencial está presentando en los últimos años. Agravamiento que cuando se produce deriva en un traslado al centro especializado en menores con trastorno del comportamiento que existe en la actualidad en la Comunidad de Madrid,

Estos casos se están atendiendo en la residencia infantil Picón de Jarama, centro de acogimiento residencial especializado en menores con trastornos de comportamiento" (50 Plazas). En el pasado año 2021 se atendieron a 77 menores, a lo largo del año, desde el recurso existente de 50 plazas.



De acuerdo con los últimos datos disponibles, que son los del año 2020, del total de **2.079 menores atendidos** durante el transcurso del año 2020 en alguno de los centros de la Red de residencias, el 70% de los menores tienen entre 13 y 18 años.

Cerca de un 38% de los menores atendidos presentan trastornos de algún tipo, destacando a nivel global:

- ✓ Un 18,4% de menores con trastornos del comportamiento, cifra significativamente superior al ejercicio anterior (12,5%).
- ✓ Un 12,1% de menores con trastornos de las emociones o del vínculo, también por encima del año anterior (9,5%).
- ✓ Un 9,8% de menores con trastornos por déficit de atención, más cercano a la proporción anteriormente detectada (8,5%).
- ✓ Y un 6,9% de menores con trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, proporción ligeramente inferior a la última registrada (7,5%).

Más de 27% de los menores atendidos consumen sustancias tóxicas:

En concreto, se han identificado 569 menores con algún tipo de adicción.

Además, más de la mitad de la población atendida ha recibido algún tipo de tratamiento (1.195 menores, el 57,5%):

De este total de menores en tratamiento, destaca a nivel global, sobre todo, el porcentaje de menores en tratamientos de psicoterapia (59,8%) y psiquiatría (50%), en línea con las proporciones registradas en años anteriores.

Por último, el tercer motivo de ingreso en un centro de acogida son los **trastornos del comportamiento y/o consumo de tóxicos** (11,4%), duplicando la proporción que se registró en el año 2019.

Este centro es el único de estas características en la Comunidad de Madrid y esta Dirección General no cuenta actualmente con recursos propios que posean la especificidad requerida para atender a dichos menores, cuya demanda de atención se ha incrementado además de manera exponencial en los últimos seis años. Se significa que desde esta Dirección General se gestiona una lista de espera de menores que precisan acceder a este recurso específico, en dicha lista de espera y la moda estadística de los casos incluidos en el pasado año es 25, todos ellos graves.

Una consecuencia de la no aprobación del contrato es la referente al impacto negativo que se produciría en la calidad de la atención en el resto de los recursos de protección no específicos dependientes de la Comunidad de Madrid. Si dichos recursos tuvieran que atender a menores con medida de protección que presentaran problemas graves de comportamiento, se alterarían sustancialmente las pautas de convivencia en los referidos recursos residenciales, recursos que no están capacitados para prestar atención terapéutica especializada. Por ello si esto fuera así se producirían daños graves, tanto en los menores residentes como en los inmuebles y materiales de esos contratos, daños derivados de la violencia que ejercen de estos menores sobre los otros y sobre sí mismos, pudiéndose dar situaciones de gran violencia, situaciones extremadamente indeseables máxime cuando el objeto de trabajo de los centros es la protección de menores.

El inmueble en el que se desarrolla el contrato que se quiere licitar es un inmueble perteneciente a la Comunidad de Madrid, que está a disposición y acondicionado para la gestión del mismo. En dicho inmueble, con el transcurrir del tiempo se han realizado adaptaciones con el fin de intervenir con menores de estas características, disponiendo tanto en las habitaciones como las zonas comunes de elementos anti-vandálicos, salas diseñadas para separar a los menores ante



comportamientos disruptivos, ventanas con cristales de máxima resistencia, apertura de seguridad de las hojas de las ventanas, entre otras.

Asimismo, se reseña que entre la casuística de los menores a los que se destina este contrato están incluidos también aquellos casos de menores que con su comportamiento se posicionan en situaciones de riesgo extremo, tanto para ellos como para los demás, menores que son utilizados por otros con fines sexuales y/o delictivos y que precisan estructuras fuertes que posibiliten intervenir con estos niños evitando que se ausenten, y se vuelvan a colocar en situación de riesgo.

La aprobación de este contrato mejorará considerablemente el desarrollo y la calidad de vida de estos niños (para los que no se dispone en la Comunidad de Madrid de recursos propios que puedan atender sus especiales características), posibilitará que se pueda realizar una intervención educativa especializada con ellos, y por ende, preservará al resto de los menores protegidos que residen en centros de la Comunidad de Madrid de sus comportamientos, evitando que alteren gravemente las pautas de convivencia establecidas en los demás centros de protección de menores, al no tener que producirse su ingreso en los mismos.

Este centro es el único centro de estas características de la Red de Protección de la Comunidad de Madrid destinado a menores con medida de protección y trastorno de conducta y el recurso está siempre a plena ocupación y con una importante lista de espera, por lo que, es imprescindible su continuidad, para lo cual, se propone la tramitación de un Contrato para el Acogimiento Residencial de 50 menores con trastornos del comportamiento, en la modalidad de acogimiento residencial (Orden 613/1990, de 6 de noviembre de la Consejería de Integración Social), de edades comprendidas entre 12 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

En Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo: Alberto San Juan Llorente

